
DARFUR:

¿PRÓXIMA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ?

INTRODUCCIÓN

Conocido en la Antigüedad como Nubia, Sudán fue incorporado paulatinamente al mundo árabe durante la expansión islámica del siglo VII; sin embargo, el Sur se escapó al control musulmán y sufrió de las incursiones de los cazadores de esclavos. Las provincias de Nubia, Senaar y Kordofan que constituye el Sudán moderno fueron conquistadas por los egipcios entre 1820 y 1822, fue conquistado y unificado por Egipto para entrar, posteriormente, en la esfera de influencia británica. A mediados del siglo XIX, centró el interés de los británicos a causa de su importancia estratégica para rutas comerciales a la India a través del recién abierto Canal de Suez y también, con el fin de limitar la influencia francesa en África. El Reino Unido le concede la total independencia en 1956, sin embargo Sudán, el más extenso país de África ha sufrido una guerra civil o conflicto de carácter secesionista en los últimos 50 años, motivada en gran parte por los conflictos entre el gobierno musulmán y las facciones cristianas y animistas que se oponen a la sharia, o ley musulmana, y para obtener la autonomía en el marco de Estados constituidos.

El conflicto secesionista se basó principalmente en el enfrentamiento entre el régimen islamista del norte y el movimiento rebelde del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), del sur. Mientras el régimen del norte, liderado por Omar Al Bashir, pretendía convertir el país en un Estado Islámico, el SPLA luchaba por la independencia del sur, que cuenta con una población principalmente cristiana y multiétnica. Este conflicto ha causado dos millones de víctimas mortales y ha provocado el desplazamiento de 4,4 millones de personas en los últimos 16 años. Aunque a menudo se ha descrito la Guerra Civil Sudanesa en términos exclusivamente étnicos y religiosos, tiene también un importante papel la lucha por los recursos de agua y petróleo en el sur y oeste del país. El colapso de la economía del norte obligó a las elites mercantiles de la zona a expandir sus actividades económicas hacia el sur, pues es allí donde se encuentran las fértiles tierras de Renk, la zona petrolífera de Bentiu y los

yacimientos de níquel y uranio. Por fin, en 2005, un tratado entre el Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y el gobierno de Jartum llevó al reconocimiento formal de la autonomía del Sur de Sudán. Sin embargo, el Gobierno de Sudán ha fracasado manifiestamente a la hora de proteger a la población de Darfur de crímenes internacionales a gran escala y ha orquestado y participado él mismo en estos crímenes. La situación se caracteriza por violaciones sistemáticas y burdas de los derechos humanos y por graves infracciones del derecho internacional humanitario. Asimismo, es lamentable la ausencia de una vía política clara para el despliegue de una fuerza de paz de la ONU en Darfur.

La región de Darfur está situada en el oeste de Sudán y abarca una zona de la extensión de Francia. Durante años ha sido escenario de enfrentamientos esporádicos entre grupos nómadas y comunidades agrícolas como los fur, los masalit y los zaghawa que se han saldado con numerosas muertes y la destrucción y saqueo de viviendas. El gobierno atribuyó la situación a la lucha por el acceso a los escasos recursos de la zona. En febrero de 2003 un nuevo grupo armado de oposición, el Ejército del Movimiento de Liberación de Sudán (SIMA), se alzó en armas contra el gobierno por considerar que éste no protegía a su pueblo y que la región de Darfur estaba marginada y subdesarrollada. Este grupo armado tenía su base de apoyo principalmente en los grupos agrícolas de la región. Poco después surgió otro grupo armado, el Movimiento para la Justicia e Igualdad (JEM). El gobierno de Sudán respondió al alzamiento de estos grupos dando carta blanca a unas milicias árabes conocidas como Yanyawid (jinetes armados) que empezaron a atacar poblados y a matar, violar y secuestrar a sus habitantes, destruyendo a su paso viviendas y otros bienes como fuentes de agua, y apoderándose del ganado.

Según cálculos de la ONU, actualmente hay cerca de dos millones de desplazados internos en Darfur que han huido de sus poblados arrasados por incendios provocados y se han refugiado principalmente en ciudades y campamentos, a menudo en condiciones muy deficientes, mientras que más de 200.000 personas han cruzado la frontera con el Chad.



**José R. Villahermosa
Jaén**

Comandante de Intendencia

BLOCKS	OIL AND GAS CONCESSION HOLDERS
1 (Unity)	Greater Nile Petroleum Operating Company:
2 (Heglig)	Talisman Energy Inc. (Canada),
4 (Kaillang)	Petronas Carigali (Malaysia), Sudapet (Sudan) and China National Petroleum Corporation (CNPC)
3 (Adar)	Gulf Petroleum Corporation (Qatar),
7 (Mellut)	Sudapet (Sudan) and China National Petroleum Corporation (CNPC)
5a	Lundin Oil AB International Petroleum Corporation (IPC) (Sweden) Petronas Carili (Malaysia) OMV Sudan Exploration GmbH (Austria) and Sudapet (Sudan)
5 (Central)	TotalEiFina (France)
6	China National Petroleum Corporation (CNPC)

U.S. Agency for International Development (USAID)
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)
Original Map Courtesy of the UN Cartographic Section
-- Oil Concession information from rightsmap.com

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.



SUDAN

- Licensed
- Open
- Orange shaded area: Areas Controlled by Opposition Groups
- Yellow shaded area: Historic North-South Boundary
- Red line: Oil Pipeline
- Oilfield symbol: Oilfield
- X symbol: Base of Operation Lifeline Sudan (OLS)
- Circle with dot symbol: Sites Visited
- Red dot symbol: Southern City Controlled by the Government of Sudan
- Open circle symbol: Controlled by the SPLM/A

8.1.2001



El gobierno no ha desarmado a los Yanyawid, como se aceptó en el Acuerdo de Alto el Fuego Humanitario firmado en Djameña en 2004, en el Acuerdo de Paz de Darfur de 2006 y en otros muchos acuerdos. Existe la necesidad urgente de que una fuerza efectiva de mantenimiento de la paz proporcione seguridad a la población civil, garantice que las personas desplazadas vuelvan a sus hogares de forma segura, voluntaria y con la ayuda necesaria, y se controle y verifique el desarme de los yanyawid. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana decidió en marzo de 2006 asignar a una fuerza de la ONU un sólido mandato y mejores recursos de los que dispone la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), la cual ha estado desempeñando funciones de mantenimiento de la paz en Darfur desde 2005. En agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz más numerosa, pero el gobernante Congreso Nacional rechazó dicho despliegue. Recientemente, en abril de 2007, se logró un incremento de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz; y finalmente en julio de 2007 se acordó el despliegue de la UNAMID no más tarde de diciembre de 2007.

GUERRA CIVIL EN SUDÁN

Hasta 1946 el Imperio británico administraba el sur y el norte de Sudán como regiones separadas. En ese tiempo, las dos áreas fueron unidas en una sola región administrativa como parte de una estrategia británica aplicada en el Oriente Medio. Este acto fue realizado sin consultar a los habitantes del sur, que temían que fueran sometidos al poder político de los del norte. Sudán del Sur fue habitado primeramente por cristianos y animistas y se consideran culturalmente subsaharianos, mientras que la mayoría de los habitantes del norte son musulmanes que se consideran a sí mismos culturalmente árabes.

La Primera Guerra Civil sudanesa fue un conflicto de 1955 a 1972 entre la parte norte, y el sur que demandaba mayor autonomía regional. Medio millón de personas murieron en los diecisiete años de luchas, de las cuales solo cien mil eran considerados combatientes armados, y cientos de miles fueron desplazados de sus casas.

En mayo de 1969, un golpe militar impondría a Jafaar Al Nimeiri como presidente. Nimeiri negoció



un arreglo en 1972 con el sur que establecía un alto el fuego y el derecho a la autodeterminación del Sudán del Sur, pero la firma de los acuerdos supuso el final político del propio Nimeiri. Durante su mandato, para poder tener acceso a las ayudas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo que aceptar las condiciones de empobrecimiento impuestas por el FMI que repercutieron sobre las condiciones de vida de la población. Ante las consecuencias de tales medidas, se impuso la Ley Islámica sobre todos los ciudadanos, independientemente de las creencias o prácticas religiosas de cada ciudadano, y de cada región. Como era de suponer, esta imposición supuso la retirada inmediata de los líderes del sur del Frente Popular de Liberación de Sudán (SPLF) y el inicio de la guerra de su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), mandado por John Garang, contra el gobierno central. Curiosamente, en 1983 expertos de la compañía estadounidense Chevron descubrieron yacimientos de petróleo en el sur del país, pero la falta de seguridad determinó la retirada de la región de las compañías extranjeras que buscaban petróleo.

La Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005) tuvo lugar en su mayor parte en el sur, siendo una de las más largas y mortíferas guerras de finales del siglo XX. Aproximadamente dos millones de civiles fueron asesinados en el sur, y otros más de cuatro millones fueron desplazados de sus casas. El conflicto se vuelve más violento y mortífero que durante la primera guerra civil sudanesa, debido a la utilización de armamento moderno y más sofisticado, el uso de grupos paramilitares, y la utilización de ayuda humanitaria y alimentos como armas de guerra por parte del Gobierno.

Cuando de nuevo se celebraron elecciones, el gobierno recayó sobre Sadiq Al Mahdi, que formó un gobierno de coalición que fue incapaz de abordar los problemas heredados de la deuda externa, la hambruna y la guerra en el sur. Además, las sequías de los años 1986, 1987 y 1988 fueron seguidas por una inundación que devastó las principales regiones agrícolas. En julio de 1989, otro golpe militar acabó con el gobierno civil y puso en el gobierno a un grupo de militares, dirigido por el Brigadier Omar Hassán Ahmed Al Bashir. Su programa político no era muy diferente del gobierno derrocado salvo en el mayor interés del nuevo gobierno de acabar con la guerra en el sur. Mientras el gobierno mantenía conversaciones de

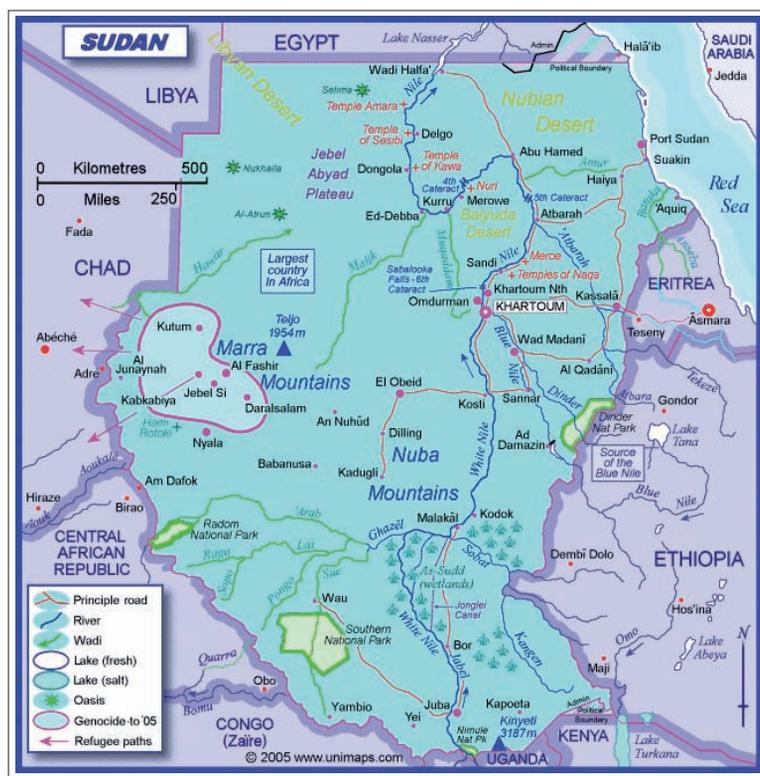




paz con el SPLF y el SPLA, con el respaldo de la Organización para la Unidad Africana, en Jartum, el Frente Nacional Islámico (FNI) se convertía en la organización política más importante del régimen, al conseguir en 1991 de nuevo imponer la Sharia. El verdadero poder tras la Junta Militar de Al Bashir era el Frente Nacional Islámico (FNI) (re-bautizado Partido del Congreso Nacional -PCN-) y su carismático líder, Hassán Al Turabi, apodado el Maquiavelo de Jartum, inspirador del golpe de Estado de 1989,

desarrolló su propia visión de un "renacimiento musulmán" en el que Sudán sería el centro de la nueva revolución islámica.

Hasta diciembre de 1996, la ofensiva rebelde encabezada por el SPLA y cuya principal base étnica son los ganaderos dinkas, estaba localizada en las regiones más meridionales del país: Ecuatoria Oriental, el sur del Bahr al Ghazal, Alto Nilo y Kurdufan meridional. Pero el 12 de enero de 1997, el SPLA abrió un nuevo frente al noreste, con el apoyo de la Alianza Democrática Nacional (NDA), que coordina las acti-



vidades de toda la oposición al régimen islamista de Jartum. La NDA está integrada por los dos más grandes partidos tradicionalistas del norte: el Umma y el Khatimiyah, y agrupa también a sectores modernizadores (sindicatos, grupos de oposición, etc.). Este acuerdo entre las facciones rebeldes permitió a Garang extender su guerra a dos provincias del noreste: Kassa, en la frontera con Eritrea, y Nilo Azul, donde se encuentra la estratégica presa de Roseras, que abastece a Jartum de electricidad. El avance rebelde

alarmó a las autoridades sudanesas, que llamaron a la yihad (guerra santa), apelando al sentimiento patriótico de los sudaneses para sufragar la guerra, y acusaron a los Gobiernos vecinos de Etiopía, Eritrea y Uganda de albergar bases insurgentes en sus territorios y de proporcionar apoyo logístico a la guerrilla.

Tras el 11 de septiembre de 2001 la situación parece que puede mejorarse debido a que la Unión Africana, alentada por los Estados Unidos y la presencia de Al Qaeda, empezó a mediar en el conflicto sudanés promoviendo una serie de

conversaciones que derivaron en un conjunto de treguas y acuerdos de libre tránsito de ayuda humanitaria. En enero de 2005, norte y sur firman los acuerdos de paz mediante los cuales se confirma el alto el fuego, el reparto del poder central, el compromiso de celebración de un referéndum en 2011 sobre la independencia de las provincias del sur, la no aplicación de la Ley Islámica en estas provincias y el reparto equitativo de los beneficios del petróleo. No obstante, los acuerdos de paz de enero de 2005 no abarcaron la región de Darfur, en el oeste, que desde febrero de 2003 está inmersa en un conflicto interno que ha causado cerca de 180.000 muertos y dos millones de desplazados.

EL EPISODIO DE DARFUR

Suele afirmarse que el inicio del conflicto de Darfur tuvo lugar el 26 de febrero de 2003, cuando un grupo autodenominado Frente de Liberación de Darfur (Darfur Liberation Front) reivindicó un ataque a Golo, el principal centro militar en el distrito Jebel Marra. Sin embargo, el conflicto se había iniciado en Darfur antes, ya que los rebeldes habían atacado comisarías de policía, puestos militares fronterizos y convoyes del ejército, y el gobierno ya había iniciado un asalto masivo por tierra y aire contra la fortaleza rebelde en las Montañas de Marra. A pesar de las amenazas del presidente Omar Al Bashir de enviar al ejército, su amenaza no se pudo cumplir porque éste se encontraba desplegado en el sur y en el este, donde rebeldes patrocinados por el gobierno eritreo amenazaban el oleoducto recientemente construido para transportar petróleo desde los campos petrolíferos hasta Puerto Sudan. El ejército, poco entrenado en operaciones en el desierto, se vio impotente para hacer frente a la táctica rebelde de lanzar rápidos ataques. Sin embargo, el bombardeo aéreo de las posiciones rebeldes en las montañas fue devastador.

En abril, una fuerza combinada del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) y del Movimiento para la Justicia e Igualdad (JEM), entró en Al-Fashir y atacó a la guarnición mientras dormía. El ataque de Al-Fashir marcó un importante punto de inflexión, tanto desde el punto de vista militar como psicológicamente. Las fuerzas armadas habían sido humilladas, y el gobierno se enfrentaba a una complicada situación estratégica. Se hizo evidente que era necesario entrenar a los soldados para esta nueva clase de guerra, y se suscitaron sospechas bien fundadas acerca de la lealtad de muchos oficiales y soldados nativos de Darfur. La responsabilidad de enfrentar a los rebeldes recayó sobre la Inteligencia Militar sudanesa. Sin embargo, en los meses intermedios de 2003 los rebeldes vencieron en 34 de 38 enfrentamientos, y el SLM comenzó a

moverse hacia el este amenazando con extender la guerra a la provincia de Kordofan. Esto hizo que el gobierno sudanés modificase su estrategia. Dado que el ejército había sido claramente derrotado, se decidió basar el esfuerzo bélico en tres elementos: la inteligencia militar, la fuerza aérea y los Yanyawid, ganaderos baggara armados que el gobierno había utilizado ya para reprimir el levantamiento de los masalit en el periodo 1996-1999. Los yanyawid se convirtieron en el centro de la nueva estrategia gubernamental de contrainsurgencia. Los recursos militares se concentraron en Darfur, y los yanyawid fueron organizados como una fuerza paramilitar.

Mientras se alcanzaba la pacificación entre las zonas norte y sur, en enero de 2004 las tropas gubernamentales lanzaron una ofensiva en la zona de Darfur, en el extremo oeste de Sudán, comprendida dentro de las jurisdicciones norte y sur, contra el Ejército del Movimiento de Liberación de Sudán (SLMA, ex Frente de Liberación de Darfur). El SLMA se había fundado el año anterior, en respuesta a ataques sistemáticos a la

región de Darfur por parte de grupos de pastores árabes de la tribu yanyawid, expulsados por la desertificación del Sahel (su región de origen), que pretendían desalojar a las tribus negras islamizadas (masalit, fur y zaghawa) de sus tierras bien irrigadas. Como resultado, en la primavera de 2004 varios miles de personas, la mayoría de etnias no árabes, habían sido asesinadas, y cerca de un millón desplazados de sus hogares, lo que provocó una importante crisis humanitaria en la región. La crisis alcanzó una dimensión internacional cuando unos 100.000 refugiados se adentraron en el vecino Chad, perseguidos por milicianos yanyawid, que se enfrentaron con las tropas del gobierno de Chad en la frontera.

En 2004, Chad patrocinó la negociación entre los grupos en conflicto en Djamena, lo que tuvo como consecuencia que se firmase un

Acuerdo de Alto el Fuego Humanitario el 8 de abril entre el gobierno sudanés, el JEM y el SLM. Un grupo se escindió del JEM en abril (el Movimiento Nacional para la Reforma y el Desarrollo) y no participó en las conversaciones ni en el acuerdo de alto el fuego. Tanto los yanyawid como los rebeldes continuaron atacando después del acuerdo. La escalada de la crisis hizo que varias personalidades advirtieran de un desastre inminente, entre ellas el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, que advirtió del riesgo de genocidio.

Mientras, el 9 de enero de 2005 el Gobierno de Sudán y los rebeldes del sur firmaron un Acuerdo de Paz Global que los comprometía a finalizar la guerra civil. El acuerdo fue firmado en Nairobi, capital de Kenia, con el vicepresidente sudanés, Ali Osman Mohammed Taha, y el líder del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), John Garang. Posteriormente, el Gobierno también firmó la reconciliación con la





Alianza Nacional Democrática (NDA) que pasó a formar parte de la administración, y el 9 de julio Garang juraba el cargo de Vicepresidente del país (sustituido por Salva Kiir un mes después por el fallecimiento de Garang) y se firmaba la nueva Constitución que otorgaba un elevado grado de autonomía para el Sur. Sin embargo, pese a este acuerdo, el conflicto de Darfur aun continuaba, pero el final de la guerra civil, la más larga de África, podría ser un primer paso hacia la paz.

El 18 de diciembre de 2005, un grupo rebelde, supuestamente formado por personas de etnia zaghawa, salió de Darfur y atacó la ciudad chadiana de Adre, cerca de la frontera sudanesa. Chad culpó al gobierno sudanés del ataque, el segundo en la región en tres días. Las crecientes tensiones en la región llevaron al gobierno de Chad a declarar las hostilidades contra Sudán, y a llamar a los ciudadanos chadianos a movi-

lizarse contra el "enemigo común". Esto dio inicio al Conflicto Chad-Sudán, que concluyó oficialmente menos de dos meses después del ataque a Adre, cuando se firmaron, el 8 de febrero de 2006, los Acuerdos de Trípoli.

El 5 de mayo de 2006, el gobierno de Sudán firmó en Abuja, Nigeria, un acuerdo con la facción del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) liderada por Minni Minnawi, en una reunión auspiciada por el subsecretario de estado estadounidense Robert B. Zoellick, el presidente de Nigeria, el presidente de turno de la Unión Africana y varios destacados diplomáticos extranjeros. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado tanto por el Movimiento para la Justicia e Igualdad (JEM) como por una facción rival del mismo SLM, dirigida por Abdul Wahid Mohamed el Nur. Los puntos principales del acuerdo, de 85 páginas, eran el desarme de las milicias Yanyawid y la incorporación de los efectivos de los



grupos rebeldes negros al ejército sudanés. A pesar del acuerdo, continuaron los combates.

El 16 de mayo de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a Darfur para ayudar a las tropas de la Unión Africana (UA) en la aplicación del acuerdo de paz. Hasta la fecha, la UA no ha sido capaz de proteger con eficacia a la población civil de los ataques de los grupos armados (en especial, de las milicias Yanyawid, respaldadas por el gobierno), y éstos siguen actuando con impunidad.

La ONU había emitido resoluciones con respecto a Darfur. El 31 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1706 para enviar una nueva fuerza de pacificación a la zona de 17.300 soldados, en sustitución de los efectivos de la Unión Africana. Sudán manifestó su enérgica oposición a esta resolución. El 1 de septiembre, según informaron oficiales de la Unión Africana, Sudán lanzó una gran ofensiva en Darfur y, poco después, conminó a la Unión Africana a abandonar la región. El 2 de octubre de 2006, tras la suspensión de la iniciativa de Naciones Unidas debido a la firme oposición sudanesa, la Unión Africana anunció que prolongaría su presencia en la zona hasta finales de año. Poco después, el 6 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó la extensión del mandato de la Misión de Naciones Unidas en Sudán hasta el 30 de abril de 2007. Por último, en abril de 2007, las Naciones Unidas aprobaron una iniciativa para poder desplegarse en la región sudanesa de Darfur mediante un contingente de cascos azules para apoyar a la misión de paz que la Unión Africana (UA) desarrolla en la zona. La Fuerza Mixta denominada UNAMID fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de julio de 2007, e inició su despliegue en enero de 2008, pero carece por el momento del personal previsto para la misión debido en parte a las objeciones de Sudán acerca de la composición del con-



tingente, además de no disponer del apoyo aéreo y la capacidad logística necesarios para el despliegue pleno y efectivo de UNAMID.

LA ONU Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La guerra civil en el sur de Sudán ha sido el contexto en el que las fuerzas armadas y las milicias que colaboran con ellas, y los grupos armados de oposición del sur del país, han cometido incontables violaciones de derechos humanos, incluido el incumplimiento sistemático de las leyes que regulan los conflictos armados internos. Los asesinatos, las violaciones, los secuestros, los bombardeos aéreos indiscrimina-

dos, los desplazamientos forzados, así como la destrucción de poblados y el saqueo de propiedades han sido hechos demasiado habituales en la guerra civil. Y sin embargo, los protocolos y acuerdos que han hecho posible la paz no mencionan estos abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes según las leyes internacionales, no estableciendo ningún mecanismo para que los responsables de esos crímenes respondan de ellos y para que se haga justicia para las miles de víctimas sudanesas. Las demandas de justicia han sido cómodamente ignoradas por los mediadores internacionales en el proceso de paz norte-sur, los cuales argumentan que sería difícil conseguir que se firmara un acuerdo de paz si a las partes del conflicto se les pidiera que respondieran de los crímenes cometidos por sus fuerzas armadas.

En el actual conflicto en Darfur se han cometido abusos similares a los del sur en escala y gravedad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encargó a una comisión de investigación internacional que investigara las graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario cometidas en Darfur, que determinase si había habido genocidio y que identificara a los perpetradores. La comisión representó el primer intento formal serio de investigar, a la luz de las leyes internacionales de dere-

chos humanos y del derecho internacional humanitario, los graves crímenes que se han cometido en esta región. La comisión de investigación nombrada por la ONU señaló en enero de 2005 que el gobierno y las milicias alineadas con él habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que el sistema judicial sudanés no estaba en condiciones de abordar la situación ni se mostraba dispuesto a hacerlo.

CRONOLOGÍA DE LAS RESOLUCIONES

La actual crisis de Darfur estalló en febrero de 2003 coincidiendo con una nueva ronda de negociaciones en Kenia entre el Gobierno y el grupo armado de la oposición del sur del país, y no por casualidad. Los rebeldes pretendían llamar la atención en el denominado proceso de paz de Naivasha para que sus demandas y la situación de la región de Darfur también se tuvieran en cuenta en las negociaciones. La comunidad internacional tuvo entonces tres opciones: dar prioridad a la paz entre el norte y el sur; dar preferencia a Darfur, o acercar la resolución de ambos conflictos. Los países que desde hace años estaban involucrados en el proceso de paz de Naivasha (EEUU, el Reino Unido, y Noruega) eligieron llevar a buen puerto las negociaciones y dar prioridad a la firma del Acuerdo Global de Paz. Otros países como Francia, China y Rusia pensaron que sus intereses nacionales (el petróleo, posibles depósitos de uranio y la venta de armas) estarían mejor servidos dando preferencia a la firma del Acuerdo Global de Paz.

La Resolución 1556, de 30 julio de 2004, instaba a Jartum a facilitar el acceso de asistencia humanitaria, a establecer las condiciones necesarias de seguridad, a desarmar a las milicias Yanyawid y capturar a sus líderes en el plazo de un mes, condición que Jartum no cumplió. Tres meses después, el 18 de septiembre de 2004 el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1564, que consideraba la posibilidad de adoptar algún tipo de medidas en el caso de la no



cooperación del gobierno sudanés y que incluso podrían afectar al sector petrolífero del país. Se estableció, además, la creación de una Comisión Internacional de Investigación para que determinara si se habían producido actos de genocidio. En noviembre de 2004, se aprobó la Resolución 1574, que devolvía todo el protagonismo al proceso de paz de Naivasha y dejaba en el olvido, de nuevo, a Darfur. A diferencia de las dos resoluciones anteriores, no se mencionaba la necesidad de establecer las precisas condiciones de seguridad, ni de que el gobierno sudanés cumpliera su compromiso de desarmar las milicias Yanyawid, ni de capturar y procesar a sus líderes, y por supuesto no contemplaba la aplicación de castigo alguno.

El 9 de enero de 2005 se firmó el Acuerdo de Paz Global, que puso fin a decenios de guerra civil entre el norte y el sur. La paz se mantuvo, aunque ciertas milicias del sur excluidas del Acuerdo continuaron combatiendo. En su informe de febrero de 2005, la Comisión de Investigación sobre la violación de Derechos Humanos en Sudán confirmó que tanto el Gobierno como las milicias aliadas Yanyawid habían cometido crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra. El 24 de marzo, la Resolución 1590 establece la creación de la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS), con el mandato de apoyar y favorecer el cumplimiento del Acuerdo de Paz Global y de facilitar ayuda a la misión de la Unión Africana (AMIS) en Darfur. El 29 de marzo, la Resolución 1591 extiende el embargo, impuesto en junio de 2004 a las fuerzas no gubernamentales activas en Darfur, al gobierno de Jartum y le



exige poner fin de inmediato a los vuelos militares ofensivos en la región. El Consejo de Seguridad establece también la creación de un Comité para que vigile dicho embargo e imponga sanciones a todos aquellos que violen los derechos humanos y el alto el fuego.

El 31 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1593 (11 países a favor y 4 abstenciones de Argelia, Brasil, China y los Estados Unidos), en la que se establece remitir a los responsables de las atrocidades cometidas en Darfur a la Corte Penal Internacional. En ella se pedía a Sudán y a todas las demás partes en el conflicto que colaboraran con la Corte. Este voto del Consejo de Seguridad marcó la primera vez que ésta institución remitía un caso a la Corte Penal Internacional en uso de las facultades que le otorga el Estatuto. La decisión del Consejo de Seguridad estuvo determinada por la recomendación hecha por el Comité Internacional de Investigación, creado en septiembre de 2004 por el Consejo, en su informe sobre la violación del derecho internacional humanitario en Darfur publicado el 1 de



febrero de 2005, en el que se afirmaba la existencia de razones suficientes para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no siendo culpable el gobierno de Sudán de llevar a cabo una política deliberada de genocidio, y recomendaban que la situación fuera remitida a la Corte Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional (TPI) sólo juzgará a algunos de los responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El 31 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1706 para enviar una nueva fuerza de pacificación a la zona de 17.300 soldados, en sustitución de los efectivos de la Unión Africana. Sudán manifestó su enérgica oposición a esta resolución. Seguidamente, en abril de 2007, las Naciones Unidas aprobaron una iniciativa para poder desplegarse en la región sudanesa de Darfur mediante un contingente de 3.000 cascos azules y siete helicópteros armados que apoyarían la misión de paz que la Unión Africana (UA) desarrolla en la zona con

7.000 soldados. El despliegue contaba con el visto bueno del gobierno sudanés, estando de acuerdo con el paquete de apoyo a la UA. La iniciativa se produjo tras la reunión del secretario general de la UA, Apha Omar Konare, con los quinientos miembros del Consejo de Seguridad especificando que las fuerzas de paz serán "predominantemente africanas y si esto no es posible se podrán buscar refuerzos fuera del continente". El paquete de la ONU sería un pequeño avance hacia una fuerza híbrida que combinara cascos azules y soldados de la UA, y el proceso debía concluir con una fuerza ONU-UA (26.000 soldados integrarían esa fuerza combinada). Posteriormente, mediante la Resolución 1769 del Consejo de Seguridad de la ONU se creó esa Fuerza Híbrida Unión Africana / Naciones Unidas. De todas formas, el Consejo declaró que no existe una solución militar al conflicto de Darfur e instó a las partes a declarar un alto el fuego y a mejorar las condiciones humanas de la población. No obstante, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU despliegue con carácter de urgencia un fuerte contingente de tropas autorizadas o no a hacer uso de la fuerza para proteger a la población civil de Darfur, puede que sea demasiado tarde.

CONCLUSIONES

La descolonización, tan mal preparada como mal realizada, ha encorsetado en el Estado-Nación a sociedades que en él se asfixian y ha integrado al mercado mundial economías de subsistencia, que fueron perdiendo pie por no haber podido recuperar un atraso tecnológico, industrial y agrícola cada vez más acentuado. Las dictaduras, los enfrentamientos tribales, el hambre, el menosprecio de los derechos humanos, los diversos integristos y radicalismos que imperan allí y allá, pueden ser considerados como otras tantas secuelas de una descolonización poco acertada. Pero, en lugar de echar la culpa al pasado, lo que ahora se hace necesario es ganar la batalla del desarrollo.

Una Fuerza Mixta de la ONU y la Unión Africana (ya bautizada como UNAMID) compuesta por soldados y policía, deberá actuar como misión militar de interposición en Darfur. Esta fuerza de pacificación no debe ser sino el primer paso hacia nuevas negociaciones políticas que involucren a todas las partes, permitiendo un alto el fuego y una mejora inmediata de la situación humanitaria. Además, debe ir acompañada de una adecuada financiación del despliegue de las tropas internacionales y del desarrollo económico de la devastada región. Serán primordiales los medios logísticos y las comunicaciones, así como las medidas necesarias a la hora de proteger a la población civil, a los trabajadores humanitarios y a los integrantes de la fuerza de paz.

Posteriormente y una vez aseguradas las condiciones de seguridad (incluyendo un efectivo control de la presencia de armas en la zona), se debería pasar a la fase de reconstrucción mediante proyectos que desarrollen y mejoren la vida cotidiana de los habitantes de Darfur:

- Acceso al agua, mediante perforaciones en busca de la misma, pues se estiman reservas suficientes para acabar con la guerra y reconstruir la economía de la región (podría ayudar a los nómadas árabes a mantener su estilo de vida y a las comunidades sedentarias a dedicarse a la agricultura, lo que a su vez impulsaría el comercio y el crecimiento económico).



- Apoyo al retorno de los desplazados, garantizando la ayuda humanitaria.

- Financiación de infraestructuras y desarrollo de la industria extractiva, ya que existen fundados indicios de reservas de crudo, yacimientos de uranio y oro.

No obstante, si no se realizan progresos reales en materia de seguridad, respeto del alto el fuego, proceso político y acceso humanitario, se volverá al sistema de sanciones contra el régimen de Jartum (con el posible veto de dichas sanciones por parte de China y Rusia) y al mantenimiento de la misión de la Unión Africana (AMIS) que ha resultado ser un fracaso por su falta de medios financieros y humanos (pese al compromiso liderado por la Unión Europea para sufragar sus gastos) e impotente ante la situación de guerra de todos contra todos, con tendencia a no salir de sus cuarteles, donde la ayuda humanitaria se ha convertido en botín de guerra y la guerra en una forma de vida.

Sudán se convertiría en un perfecto candidato para ser penetrado desde el Sahel por el terrorismo yihadista que considera a los países musulmanes que no aplican la Sharia o Ley Islámica como enemigos del Islam (el fin de Al Qaeda es destruir a los Estados y a los musulmanes que no apoyen los criterios rigoristas de dicha organización). No actuar puede provocar una desestabilización del Chad (también con recursos energéticos controlados por Estados Unidos) debido a la presión por el oeste de Al Qaeda para el Magreb Islámico y por el este de Sudán por el conflicto de Darfur.

Por otra parte, China ejerce un neocolonialismo que puede ser fatídico para el continente africano, y EE.UU. se ha situado por intereses energéticos en el Cuerno de África (Djibuti) y en el Golfo de Guinea, aunque no le interesa una posible complicación en los asuntos del Chad ni la presión de Al Qaeda desde la región del Sahel desestabilizando África. Euro-

pa, a pesar de su falta de decisión y consenso (solo Francia e Inglaterra actúan en su propio interés y como antiguas metrópolis colonialistas), debería avanzar y coordinarse en su positiva relación con la Unión Africana y recuperar la confianza de África (Bélgica, Holanda, Alemania, Portugal, Italia y España también estuvieron presentes en dicho continente, debiendo vertebrar sus antiguas influencias y relaciones). Europa necesita frenar, con una política multidimensional para el continente africano y mediante actuaciones multidisciplinarias, los futuros problemas de masiva inmigración, natalidad inexistente, escasez de agua y terrorismo yihadista que desestabiliza el África mediterránea y subsahariana.

Respecto a las responsabilidades penales individuales, averiguar la verdad y proporcionar reparación plena a las víctimas es crucial para crear una paz duradera en Sudán. Si los sospechosos de graves abusos en el contexto de la guerra civil entre el norte y el sur no comparecen ante la justicia significará para ellos, y para otros, que pueden continuar violando los derechos humanos en Darfur o en cualquier otro lugar, con total impunidad. Un plan global para acabar con la impunidad en Sudán reforzaría el acuerdo de paz norte-sur y podría también contribuir a poner fin a los abusos contra los civiles actualmente sitiados en Darfur. Acabar con la impunidad es esencial para que las víctimas de graves crímenes según las leyes internacionales y para que los familiares de las personas muertas, desaparecidas o torturadas afronten su pérdida y obtengan reparación; para garantizar que los perpetradores de esos delitos se encuentren en una posición en la que nunca más puedan cometer esos abusos; para mostrar que esos crímenes no volverán a ser tolerados; para evitar que la gente busque venganza y se tome la justicia por su mano; y por último, para eliminar la amenaza de que esos crímenes se repitan en el futuro ■